

Un Pacto Verde justo para todos.

15 propuestas para dinamizar las ciudades y regiones

Nosotros, políticos progresistas elegidos a nivel local y regional, creemos firmemente que la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad va indisolublemente unida a la lucha contra las desigualdades sociales y territoriales. Los fenómenos meteorológicos extremos de este verano han puesto de manifiesto una vez más cómo afecta el cambio climático a las distintas regiones, a sus habitantes y a las economías locales. El calentamiento global causado por el hombre afecta a todos los aspectos de nuestra vida: el aire que respiramos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos y los lugares en los que vivimos.

La contaminación atmosférica se cobra por sí sola la vida de casi 300 000 europeos cada año, lo que supone una amenaza especialmente grave para las personas más vulnerables.

La agricultura produce una cantidad abrumadora de emisiones de amoníaco en la UE, dañando los ecosistemas y las aguas subterráneas. Al mismo tiempo, la transición a métodos más sostenibles de producción de alimentos supone una pesada carga para los agricultores.

La vivienda es responsable del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, mientras que el tráfico por carretera genera el 40 % de las emisiones de óxido de nitrógeno del continente, sobre todo en zonas urbanas y calles transitadas. Nuestra dependencia de los combustibles fósiles ha provocado un aumento de la pobreza energética y de movilidad, lo que incide muy negativamente en la transición sostenible de los edificios y el transporte.

¡Necesitamos actuar con urgencia!

Los Socialdemócratas Europeos pusieron en marcha el Pacto Verde Europeo, un ambicioso proyecto con un horizonte de treinta años que implica cambios legislativos y culturales fundamentales al objeto de afrontar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, lograr que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050 y asegurar el suministro energético y alimentario de nuestro continente. El Pacto Verde Europeo ha propiciado una reforma legislativa sin precedentes, no solo porque establece objetivos ambiciosos para el medio ambiente, la biodiversidad y la agricultura, sino también por abordar numerosos retos sociales. Ahora ha llegado el momento de aplicarlo, utilizando el efecto multiplicador de los gobiernos regionales y locales para movilizar a toda la sociedad en torno a él y garantizar que aporte resultados sociales y distributivos positivos a nuestras sociedades en todas las regiones de la UE.

Los entes locales y regionales progresistas están al frente en la labor de hacer realidad sobre el terreno los objetivos ecológicos de la UE, construyendo modos de vida resilientes al cambio climático guiados por los principios de subsidiariedad activa, equidad, justicia social y cohesión territorial. Hacer del Pacto Verde una solución accesible y asequible para todos debe ser una prioridad fundamental para nuestra familia política en la próxima legislatura de la UE 2024-2029, así como conducir a Europa hacia un marco de bienestar sostenible e inclusivo.

Un Pacto Verde justo para todos.

15 propuestas para dinamizar las ciudades y regiones

Como políticos progresistas elegidos a nivel local y regional, pedimos que se pongan en marcha a escala de la UE las quince propuestas siguientes:

1

Implicar activamente a la ciudadanía, las ciudades y las regiones en la transición ecológica

Proporcionar un nuevo marco de gobernanza para salvaguardar el Pacto Verde Europeo, implicando activamente a la ciudadanía, las ciudades y las regiones como agentes clave de su aplicación. El actual marco de gobernanza energética y climática no permitirá conseguir la neutralidad climática, ya que los principales objetivos climáticos se han fijado a escala de la UE, mientras que las decisiones en materia de política energética siguen correspondiendo en gran medida a prerrogativas nacionales.

2

Impulsar las inversiones ecológicas

Los nuevos objetivos de reducción de la deuda limitan las inversiones públicas ecológicas necesarias para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Dada la insuficiente financiación pública, la UE corre el riesgo de incumplir sus objetivos en materia de cambio climático para 2030, tal y como advierte el Tribunal de Cuentas Europeo. Por lo tanto, urge reformar la gobernanza económica de la UE para apoyar las inversiones públicas y privadas en la transición ecológica.

3

Aprovechar al máximo las oportunidades de inversión ecológica en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Los Estados miembros deben hacer pleno uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para las inversiones relacionadas con el Pacto Verde. Debería considerarse la posibilidad de ampliar el calendario de ejecución de los proyectos, ateniéndose al modelo correspondiente de política regional.

4

Mejorar las capacidades de las personas para orientarse en las transiciones ecológica y digital

Velar por que los empresarios inviertan no solo en nuevas tecnologías, sino también en el capital humano necesario para utilizarlas. Comienza ahora la carrera para dotar a las personas de las capacidades necesarias para navegar con éxito los nuevos contornos del mundo laboral en la transición ecológica y digital. En este contexto, pedimos que se establezca una taxonomía social.

5

Garantizar el derecho a respirar aire limpio

Acelerar la implantación del Plan de Acción «Contaminación Cero» que acompaña a los ambiciosos objetivos de la UE a través de medidas adecuadamente sólidas que apoyen su aplicación efectiva y protejan los fondos de la UE para que no se financien con ellos proyectos que deben correr a cargo de quien contamina. Los ciudadanos y ciudadanas cuya salud se vea amenazada por la contaminación atmosférica deberían tener derecho a indemnizaciones de mayor cuantía cuando se infrinjan las normas y se superen los límites.

6

Fomentar la economía circular

Acelerar la transición de un sistema extractivo de producción lineal a una economía circular regenerativa, impulsando la mejora de las capacidades y la innovación social y tecnológica necesarias, promoviendo modos de producción y consumo sostenibles y potenciando el papel ejemplar de las autoridades públicas a través de una reorientación radical hacia normas de contratación circular y más ecológica.

7

Completar la Ley de Restauración de la Naturaleza y reducir el uso de plaguicidas

La propuesta de la Comisión de promulgar una Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas, los hábitats y las especies en todas las zonas terrestres y marítimas de la UE, se ve amenazada. Es absolutamente esencial finalizar su tramitación antes de que termine la actual legislatura. Esta batalla va unida a nuestra ambición de reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50 % de aquí a 2030 y garantizar una acción coherente que fomente unos suelos sanos y el uso de sistemas de control de plagas respetuosos con el medio ambiente.

8

Regular los mercados agrícolas

Garantizar una regulación sólida de los mercados agrícolas, que contemple la constitución de existencias y acuerdos comerciales internacionales más justos, con el fin de luchar contra la especulación y la inflación de los precios de los alimentos, que penalizan sobre todo a los europeos más desfavorecidos y a los consumidores vulnerables. Salvaguardar la seguridad alimentaria garantizando la resiliencia y sostenibilidad de nuestra producción y nuestro consumo de alimentos.

9

Garantizar la accesibilidad a alimentos de calidad

Garantizar que las futuras políticas europeas propicien el desarrollo de un sistema de seguridad social de la alimentación que favorezca el acceso a alimentos sostenibles, sanos y asequibles para todos en nuestras regiones y ciudades.

10

Reforma de la política agrícola común (PAC)

Revisar la PAC para desarrollar marcos que refuercen la cooperación urbano-rural en el ámbito de la alimentación y la agricultura y fortalezcan los sistemas alimentarios locales y regionales con el fin de mejorar la calidad de los alimentos, la sostenibilidad de la agricultura, la calidad del empleo en el sector y unos ingresos justos para los agricultores, al tiempo que se garantiza el acceso a las tierras de cultivo.

11

Hacer funcionar el Fondo Social para el Clima

Es necesario aumentar la dotación financiera del Fondo Social para el Clima en el próximo marco financiero plurianual (MFP) con el fin de ayudar a los consumidores vulnerables y a las pequeñas empresas a superar la pobreza energética y de movilidad. El Fondo Social para el Clima debe integrarse mejor en la política de cohesión y gestionarse conjuntamente con las regiones. Al mismo tiempo, la UE debe abstenerse de apoyar financieramente a las empresas de combustibles fósiles.

12

Mejorar el acceso a una vivienda asequible

Demasiados ciudadanos y ciudadanas se enfrentan a una sobrecarga del coste de la vivienda y a la inseguridad derivada de la financierización del sector, que la considera una mercancía para el comercio y la inversión. La vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y consagrado en el principio 10 del pilar europeo de derechos sociales. Por tanto, se requiere una mayor ambición para mejorar el acceso a una vivienda asequible, tanto en lo que se refiere a las normas sobre ayudas estatales como a la regulación de las inversiones especulativas al respecto.

13

Garantizar una vivienda digna

Garantizar que la oleada de renovación mejore la calidad y la asequibilidad de la vivienda en toda la UE y permita una planificación urbana centrada en las personas. Con el apoyo de la Iniciativa Europea de Vivienda Responsable, se deberían promover normas de calidad para la vivienda en general y para la vivienda social en particular. Para promover entornos urbanos sostenibles y mejorar el futuro de nuestras ciudades, los responsables políticos deben impulsar la densificación urbana y limitar la expansión de las ciudades.

14

Erradicar la pobreza energética

Potenciar el plan REPowerEU y la aplicación del paquete de medidas «Objetivo 55» para seguir acelerando la transición energética que nos permitirá instaurar un sistema energético más descentralizado y democrático, que garantice una energía sostenible, segura y asequible para todos. Intensificar las inversiones en energías renovables y hacer hincapié en el desarrollo de tecnologías limpias, entre ellas el hidrógeno renovable. Iniciativas como las comunidades locales de energía deberían recibir más apoyo, por tratarse de una herramienta que permite luchar contra la pobreza energética.

15

Hacer accesible la movilidad sostenible

Aplicar el principio 20 del pilar europeo de derechos sociales haciendo valer el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de la UE a una movilidad sostenible y asequible como servicio básico, y establecer una estrategia para luchar contra la pobreza de movilidad, que constituye un problema cada vez mayor en la UE. Es necesario disponer de un indicador para los distintos Estados miembros, establecido conjuntamente con los entes locales y regionales. En él deberían conjugarse los retos de la movilidad y la pobreza energética, de modo que sirva para replantearnos la forma en que diseñamos y planificamos las ciudades. Además, habrá que instaurar regímenes de subvenciones que fomenten la utilización de vehículos eléctricos en las zonas rurales remotas.